

SEIS MESES DE GESTIONES DEL GRUPO DE CONTADORA

La reunión de Caraballeda (Venezuela) los días 11 y 12 de enero, en la cual los cancilleres de los países que integran los grupos de Contadora y apoyo ratificaron su decisión de continuar impulsando una solución política negociada para la crisis del área centroamericana, constituyó la revitalización de dichas gestiones tras su virtual paralización desde el 19 de noviembre de 1985, cuando fue aceptada una moción presentada por el gobierno costarricense para congelar por 6 meses los contactos regionales, mientras se elegían los nuevos presidentes de Guatemala, Honduras y Costa Rica.

De esta manera, Contadora retornó al escenario regional antes de lo previsto mucho más fortalecida de lo que algunos esperaban y con la convicción de ser "una necesidad que surge del fondo mismo del conflicto regional, por lo que es una esperanza que no ha muerto ni puede morir", tal y como lo indicara el presidente venezolano, Jaime Lusinchi, en el discurso inaugural de dicha reunión. El mensaje de Caraballeda explicita la necesidad de un compromiso regional con la iniciativa de paz y reconoce en la intransigente actitud del gobierno norteamericano uno de los obstáculos fundamentales para ello. En este contexto, la toma de posesión de Vinicio Cerezo de la presidencia de Guatemala, el 14 de enero, fue una ocasión favorable para persuadir a los gobiernos centroamericanos sobre la urgente necesidad de reactivar el proceso de paz. Así, el 16 de enero se firmó en la capital de ese país la

"Declaración de Guatemala" en la cual los cancilleres del área expresaron su "adhesión a los principios y propósitos formulados en Caraballeda, así como a las acciones propuestas para reiniciar el proceso pacificador."

Más tarde, el 10 de febrero, los cancilleres de los grupos de apoyo y Contadora se reunieron en Washington con el secretario de Estado norteamericano, George Shultz, para entregarle el documento de Caraballeda y solicitarle la reanudación del diálogo entre su país y Nicaragua y el fin del apoyo a los antisandinistas. Su respuesta no fue muy alentadora. Por el contrario, evidenció la escasa disposición del gobierno de Reagan para contribuir con el proceso y, aún más, su prepotente actitud de franca confrontación con Contadora al lanzar toda una campaña de apoyo para conseguir la ayuda militar para las bandas antisandinistas.

El 26, 27 y 28 de febrero, los cancilleres de Contadora y del grupo de apoyo sostuvieron en Punta del Este (Uruguay) una segunda reunión colectiva. Tras la reunión se dio a conocer un documento donde señalan que "el cese de apoyo externo a las fuerzas irregulares y movimientos insurreccionales que operan en la región, constituye un imperativo para el restablecimiento del orden jurídico internacional." Se enfatiza, además, que "Latinoamérica debe resolver sus problemas sin injerencia externa, y puede hacerlo."



En el marco del apoyo internacional que ha caracterizado a las gestiones de Contadora, es significativo el respaldo firme e incondicional del parlamento latinoamericano en la inauguración de su reunión extraordinaria en la ciudad de Guatemala el 3 de abril. El pleno de parlamentarios coincidió en repudiar la política injerencista de Estados Unidos en Centro y Sur América señaló que “sólo existe una alternativa para encontrar la paz y preservar la democracia en nuestro continente: la unificación frente a la intervención.”

Los días 5, 6 y 7 de abril, los grupos de Contadora y de apoyo se reunieron en Panamá con los cancilleres de la región centroamericana. Las negociaciones concluyeron con la redacción de un documento titulado “comunicado de Panamá.” En Panamá no se llegó a ningún consenso satisfactorio, ya que la delegación nicaragüense no aceptó una fecha límite para firmar el acta de paz, “mientras el gobierno de Estados Unidos no cese su agresión contra nuestro pueblo.”

En esta ocasión, los países centroamericanos caracterizados por su tradicional sumisión a los lineamientos de la política exterior norteamericana, mostraron un incondicional apoyo a las gestiones de Contadora criticaron duramente al go-

bierno sandinista por constituir “el único obstáculo para conseguir la paz en el área.” El canciller salvadoreño dijo incluso que “la intransigencia nicaragüense imposibilita llegar a un acuerdo... El Salvador está dispuesto a firmar el acta, con o sin Nicaragua.”

En esta reunión se acordó fijar el 6 de junio como fecha límite para dar oficialmente por concluida la negociación del texto y se invitó a los países de la región a dar una respuesta a la propuesta en un lapso no mayor de 8 días. Faltaban las negociaciones sobre el control de armamento y las maniobras militares.

Días más tarde, el 12 de abril, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, anunció oficialmente que su gobierno “está dispuesto a firmar el acta en la fecha fijada, siempre que para esa fecha haya cesado la agresión norteamericana.” Después de la aceptación condicionada de Nicaragua, los obstáculos fueron múltiples. El gobierno de Reagan, por su parte, echó mano de todos los medios a su alcance para bloquear un posible éxito de la iniciativa de paz. Antes de la aceptación, Nicaragua había sido acusada de negarse a firmar; pero al anunciar su decisión de firmar, tanto el gobierno de Reagan como sus

fieles seguidores centroamericanos, en su afán de aislar al gobierno nicaragüense y justificar la continuación de la ayuda a las bandas terroristas de ex-guardias somocistas, explicitaron sus temores de que dicho gobierno no cumpliera con el tratado suscrito.

Los bloqueos impulsados por el gobierno norteamericano hicieron de la fecha límite incierta desde un principio, para firmar el acuerdo una posibilidad cada vez menos realista. En un primer momento el gobierno de Reagan subordinó las posibilidades de paz a la realización efectiva de una moratoria armamentista; pero en la medida que el gobierno sandinista presentó a Contadora y a sus vecinos de la región proyectos concretos, realistas y verificables para una reducción de armamentos, los funcionarios norteamericanos dieron un desesperado viraje en sus posturas, acudiendo a nuevas argucias nada dignas para imposibilitar la suscripción del tratado. Efectivamente, las posibilidades de paz en el área ya no estribaban en la solución del problema armamentista y de seguridad, sino en la existencia y establecimiento de "democracias pluralistas" en cada uno de los países centroamericanos.

Siguiendo el juego a la política exterior norteamericana, algunos gobiernos del área se adhi-

rieron fielmente a la confrontación con el gobierno sandinista. Las vacilaciones y contradicciones que han caracterizado las posturas de estos gobiernos se hicieron cada vez más plausibles. El Salvador, uno de los países que más había insistido en que el tratado fuera firmado el 6 de junio, anunció el 30 de mayo que su gobierno no estaba dispuesto a firmar el acta en esa fecha.

Sin embargo, pese al estancamiento el grupo de Contadora convocó a una reunión en Panamá en la fecha fijada. En esta ocasión sólo los representantes nicaragüenses llegaron con el propósito de lograr un avance significativo en las negociaciones. Los cancilleres de los países restantes habían exteriorizado días antes sus reservas y objeciones, las cuales coincidían con los puntos de vista del gobierno de Reagan.

La cita sirvió para que el 7 de junio Contadora entregara a los cancilleres centroamericanos la cuarta y "última versión del tratado de paz," lograda tras intensas conversaciones. La presentación del nuevo proyecto pasó por alto la fecha fijada con anterioridad como plazo final de las gestiones de paz y dejó abierta la posibilidad de posteriores negociaciones. Después de presentar la versión final del acta, en la cual se intentan



conciliar las posiciones hasta hoy encontradas, se dio a conocer una declaración donde se enfatizan tres compromisos imperativos.

En primer lugar se pide a los países de la región que "no se permita la utilización de su territorio para que desde él se agreda a otro país o se dé apoyo militar a fuerzas irregulares." En segundo lugar, que "ningún país se constituya en miembro de alianzas militares o políticas que amenacen la paz y la seguridad en la región, insertándola en el conflicto este-oeste" y, por último, en clara alusión a la política internacional de Estados Unidos se exhorta a que "ninguna potencia ayude militar o logísticamente a fuerzas irregulares que actúan o pueden actuar en la región, o utilicen o amenacen con utilizar la fuerza para derrocar a un gobierno del área."

A continuación el gobierno nicaragüense reiteró en repetidas ocasiones su firme voluntad de continuar las negociaciones bajo la iniciativa de Contadora y mostró su disposición a firmar y aplicar el acta "hasta sus últimas consecuencias." En contraste con esto, los gobiernos centroamericanos aliados a Estados Unidos adoptaron posturas explícitas de aislamiento y confrontación respecto a Nicaragua. Cabe señalar que el gobierno guatemalteco, que hasta este momento había mantenido una postura moderada, concebida como "neutralidad activa," se adhirió plenamente a esta política de confrontación y a las maniobras de bloqueo a las gestiones del grupo pacificador.

El canciller salvadoreño hizo de las ya tensas e inciertas gestiones un caos casi total que le mereció la reprobación de diversos sectores no sólo nacionales, sino internacionales. El 12 de junio declaró irreflexiva e irresponsablemente que "la función de Contadora ha terminado, pues el documento que presentó en Panamá no satisface los anhelos de paz de la región... no hay más tutelaje, no hay más manejos... va a haber ahora las reuniones que nosotros queramos y se realizarán en el momento y lugar que queramos... si los integrantes de Contadora nos quieren acompañar queda a su responsabilidad." Estas torpes declaraciones aparte de ratificar una incondicional subordinación de la política exterior salvadoreña a los intereses estratégicos norteamericanos, evidenciaron la carencia de un mínimo de prudencia diplomática.

Uno a uno, los demás países aliados al gobierno norteamericano expresaron también su no disposición a firmar el acta. Sólo Guatemala

guardó cierta distancia de estas posiciones y reconoció que "se necesita el concurso de Contadora para lograr cualquier acuerdo de paz." Este boicot abierto de los centroamericanos contra el proceso de Contadora coincidió con la reanudación de la campaña de la Casa Blanca para conseguir la aprobación de 100 millones de dólares para los grupos contrarrevolucionarios de Nicaragua. Como era de esperarse, los funcionarios norteamericanos alegaron que una salida política y negociada había quedado imposibilitada, que las gestiones de Contadora habían fracasado y que Nicaragua era el foco de la subversión y de la tensión en el área.

La obsesión de la Casa Blanca por ayudar a los antisandinistas no ha tenido reparos. No sólo ha difamado y calumniado al gobierno nicaragüense, sino que incluso ha empujado a sus aliados a boicotear la única alternativa política de solución al conflicto, sin importarles los costos humanos para los pueblos de la región.

Mientras el gobierno de Estados Unidos incrementaba su campaña por conseguir del congreso la ayuda para los contrarrevolucionarios, la diplomacia centroamericana, excluida Nicaragua, realizó una serie de contactos y reuniones para elaborar lo que consideraba una "propuesta alternativa" a la presentada por Contadora. En esos días la cancillería nicaragüense ratificó una vez más su adhesión a Contadora y presentó un nuevo proyecto sobre la reducción de armamento, pero su propuesta fue burdamente ignorada por el bloque centroamericano aliado de Estados Unidos.

Efectivamente, el 25 de junio, tras la bien orquestada campaña de la Casa Blanca, el congreso aprobó por 221 contra 209, la concesión inmediata de ayuda militar a los contrarrevolucionarios. Con lo cual, las hipócritas declaraciones de algunos funcionarios norteamericanos de apoyar la iniciativa de paz de Contadora quedaron totalmente desenmascaradas. A Estados Unidos no le interesa evitar una guerra en la región y mucho menos un final positivo para las gestiones de Contadora; su único propósito es la desestabilización del gobierno sandinista al cual considera un peligro para sus intereses económicos y militares en el área.

Dos días más tarde, el 27 de junio, la Corte Internacional de Justicia de la Haya condenó a Estados Unidos por su agresión contra Nicaragua. La primera semana de julio se caracterizó por el rechazo de la comunidad internacional a la

política norteamericana hacia Centroamérica y, específicamente, a la ayuda a los contrarrevolucionarios. Contadora también se hizo presente y dejó oír su voz de repudio a la decisión norteamericana. Mantuvo sendas reuniones con los secretarios generales de la ONU y de la OEA, y criticó decidida y firmemente la política ilegal norteamericana.

Pese al apoyo internacional, el grupo pacificador no ha podido salir de lo que se considera su peor crisis. El *impasse* de sus gestiones, propiciado por Washington y sus incondicionales aliados en el área, se ha constituido en el obstáculo más peligroso para la paz regional.

C. G. R.

